



**Medellín, diez (10) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)**

**REFERENCIA:** RECURSO DE APELACIÓN- ORDINARIO LABORAL  
**DEMANDANTES:** JOSÉ MIGUEL CABARCAS PUELLO Y NELLY DEL CARMEN ACUÑA TORRES  
**DEMANDADO:** PROTECCION S.A.  
**PROCEDENCIA:** JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN  
**RADICADO:** 05001-31-05-013-2015-00461-02

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, procede a resolver el RECURSO DE APELACIÓN, interpuesto por el apoderado judicial de la sociedad demandada, contra el auto del 23 de agosto de 2023, dictado por el JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, mediante el cual se aprobó la liquidación de costas, en el proceso ordinario laboral de la referencia.

El presente asunto fue debidamente discutido por los miembros integrantes de la Sala, acogándose el proyecto de providencia presentado por el magistrado ponente FRANCISCO ARANGO TORRES, consignado en los siguientes términos:

#### **ANTECEDENTES:**

Los accionantes formularon demanda ordinaria laboral contra PROTECCIÓN S.A., pretendiendo el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes por el deceso de su hijo OSCAR ALFREDO CABARCAS ACUÑA, desde la fecha de su fallecimiento el 16 de enero de 2006, intereses moratorios previstos por el art. 141 de la Ley 100 de 1993 y/o Indexación de las condenas.

El Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, profirió sentencia el 23 de enero de 2017, despachando de manera desfavorable las pretensiones de la demanda, absolviendo de las mismas, tras considerar que los demandantes no acreditaron la dependencia económica respecto de su fallecido hijo OSCAR ALFREDO CABARCAS ACUÑA y condenó en costas a los actores a favor de PROTECCIÓN S.A., disponiendo que serían liquidadas oportunamente por la secretaría del despacho.

Contra dicha providencia fue interpuesto recurso de apelación, el que fue desatado por esta Sala de Decisión Laboral del Tribunal, mediante sentencia del 20 de marzo de 2019, en la que se decidió, CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, en cuanto negó la pensión de sobrevivientes al demandante JOSÉ MIGUEL CABARCAS PUELLO, pero la REVOCÓ respecto de la codemandante NELLY DEL CARMEN ACUÑA TORRES, para en su lugar, condenar a PROTECCIÓN a reconocerle y pagarle dicha prestación en un monto equivalente al salario mínimo legal mensual vigente, a partir del 7 de abril de 2012, declarando prescritas las causadas con anterioridad a dicha fecha, debiéndose indexar las mesadas a pagar y con 14 mesadas al año, ordenando igualmente, imputar el monto de la devolución de saldos y descontar el porcentaje para el aporte al sistema de salud, y, absolviendo de los intereses moratorios.

Asimismo, condenó a SEGUROS BOLIVAR S.A. a reconocer y pagar a PROTECCIÓN S.A., el capital necesario para financiar la pensión de sobrevivientes y finalmente, condenó en costas al señor JOSÉ MIGUEL CABARCAS PUELLO a favor de PROTECCIÓN S.A., fijando las agencias en derecho en la suma de \$100.000 y **costas en ambas instancias a cargo de PROTECCIÓN S.A. a favor de la señora NELLY DEL CARMEN ACUÑA TORRES, fijando las agencias en derecho de segunda instancia en la suma de \$900.000, correspondiéndole fijar a la a quo, las de primera instancia.**

Los apoderados del señor JOSÉ MIGUEL CABARCAS PUELLO y la llamada en garantía COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A., interpusieron contra el fallo de segunda instancia recurso extraordinario de casación, el que fue desatado mediante sentencia SL1177 del 17 de mayo de 2023, por la SCL de la H. CSJ, Sala de Descongestión, la que decidió NO CASAR la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.

Una vez regresó el proceso de la Corte Suprema de Justicia, se emitió por parte de la agencia judicial de primera instancia el auto del 23 de agosto de 2023, ordenándose cumplir lo resuelto por el superior. Acto seguido, liquidó las costas estableciendo a cargo de PROTECCIÓN S.A. y en favor de la señora NELLY DEL CARMEN ACUÑA TORRES agencias en derecho de primera instancia, en la suma de \$9.100.000 y de segunda instancia de \$900.000, para un total de \$10.000.000; asimismo, liquidó, a cargo del señor JOSÉ MIGUEL CABARCAS PUELLO y en favor de PROTECCIÓN S.A., como agencias en derecho de primera instancia la suma de \$200.000, en segunda instancia \$100.000 y de casación \$5.300.000 para

un total de \$5.600.000; liquidación que fue aprobada en auto de la referida fecha 23 de agosto de 2023.

### **DEL RECURSO DE APELACIÓN.**

El apoderado de la sociedad demandada PROTECCIÓN S.A., interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra el auto que aprobó la liquidación de costas, al considerar que la suma de \$9.100.000 no se compadece con el trámite del proceso, puesto que la tardanza por congestión judicial no debe ser imputada a su representada, por lo que las costas fijadas son excesivas.

Indica que, como se observa de lo estipulado en el artículo 366 del Código General del Proceso, al momento de liquidarse las costas, se debe aplicar las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo el juez, tener en cuenta, además de otros criterios, la duración de la gestión realizada, pues reitera, para procesos como éste, el tiempo que tardó no debe ser cargado a la demandada.

Por lo anterior, solicita reponer el auto que aprueba la liquidación, ajustando el mismo en el valor real liquidado en segunda instancia, y se disminuyan las impuestas en primera.

El Juzgado de Instancia no repuso la decisión tomada y ordenó el envío del expediente para surtir la apelación.

### **DE LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:**

Corrido el traslado para presentar alegatos de conclusión, ninguno de los sujetos procesales, hicieron uso de este derecho.

Por ser competente esta superioridad, para conocer del recurso de apelación contra el auto que aprobó la liquidación de costas conforme al numeral Nral 11 del Art. 65 del CPTSS y el Nral. 5º del Art. 366 del CGP se procede a resolver el mismo, previas las siguientes.

## CONSIDERACIONES:

La Sala se ocupará del estudio del recurso de apelación, con apego al imperativo contenido en el artículo 66 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, según el cual: *“La sentencia de segunda instancia, así como la decisión de autos apelados, deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación”*.

La parte recurrente no está de acuerdo con el valor de las costas aprobadas por la *a quo* en primera instancia, en cuantía de \$9.100.000 a cargo de PROTECCIÓN S.A, a favor de la codemandante NELLY DEL CARMEN ACUÑA TORRES, suma que a su consideración, a la luz de lo estipulado en el artículo 366 del CGP, es excesiva, además que la tardanza del proceso no debe ser cargada a esta sociedad.

Para resolver el recurso de apelación, primeramente, se debe manifestar que de conformidad con el artículo 366 del C.G.P modificado por el artículo 43 de la Ley 794 de 2003, aplicable en materia laboral, por remisión que hace el artículo 145 del C.P.L. y de la S.S., establece lo siguiente:

*“Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquéllas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá además en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.”*

Asimismo, el Acuerdo 1887 del 26 de junio de 2003, del Consejo Superior de la Judicatura, en su artículo 3º señala que:

*“Criterios. El funcionario judicial, para aplicar gradualmente las tarifas establecidas hasta los máximos previstos en este Acuerdo, tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables. Las tarifas por porcentaje se aplicarán inversamente al valor de las pretensiones.”*

Y en el párrafo del literal 2.1.1. del artículo sexto, indica el referido Acuerdo que, en el proceso ordinario laboral, el monto de las agencias en derecho a favor del trabajador en primera instancia, se tasarán así:

*“Hasta el veinticinco por ciento (25%) del valor de las pretensiones reconocidas en la sentencia. Si ésta, además, reconoce obligaciones de hacer, se incrementará hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes por este concepto.*

*En los casos en que únicamente se ordene o niegue el cumplimiento de obligaciones de hacer, hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes.”*

*Si la sentencia reconoce prestaciones periódicas, hasta veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes.”*

Los anteriores preceptos legales establecen que el monto máximo de las agencias en derecho es el 25% del valor de la condena, o *hasta veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes* cuando *la sentencia reconoce* prestaciones periódicas, lo que le da una discrecionalidad al Juez para que las fije en un valor que no supere ese porcentaje o número de salarios, eso sí, teniendo en cuenta algunos criterios que son relevantes para su fijación.

Es así, que aplicados los anteriores criterios y que son los que sirven de base para fijar el valor de las agencias en derecho, se tiene lo siguiente:

-La naturaleza de la presente acción: Se trata de una demanda ordinaria laboral de primera instancia, en donde los demandantes buscaban el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por la muerte de su hijo, asunto de mediana complejidad en tanto aparte del análisis de prueba documental, se debió hacer una debida valoración de testimonios y de la situación socioeconómica del grupo familiar para establecer si los demandantes cumplieron o no el requisito de la dependencia económica respecto del causante para poder acceder a dicha prestación.

-La calidad y duración útil de la gestión desplegada por el apoderado judicial del demandante: Se evidencia que las actuaciones de mayor relevancia y utilidad que ha realizado en la presente acción ordinaria, fueron las de incoar la demanda, asistir y participar en las audiencias de trámite realizadas en primera instancia, presentar recurso de apelación pues la sentencia fue desfavorable para los demandantes, y, en segunda instancia, luego de proferirse decisión favorable únicamente para la codemandante NELLY DEL CARMEN ACUÑA TORRES, se interpuso por parte del apoderado de los actores y de la COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A., el recurso extraordinario de casación.

En cuanto a la duración del proceso, se observa que la demanda fue presentada el 07 de abril de 2015 (folio 20 archivo 01ExpedienteDigitalParte01), tuvo sentencia de primera instancia el 23 de enero de 2017 y de segunda instancia el 20 de marzo de 2019, es decir, casi

4 años, lo que es un tiempo razonable atendiendo la congestión judicial de nuestro país que es un hecho notorio.

Adicional a ello, en vista del recurso extraordinario de casación, sólo vino a proferirse la respectiva sentencia el 17 de mayo de 2023, esto es, 4 años más aproximadamente, por lo que, en total, el proceso duró alrededor de 8 años, estando la mitad del tiempo en la Sala de Casación Laboral en espera de definición del recurso, duración que se ha generado debido a la alta congestión que desde años atrás y a la fecha, presentan tanto los Juzgados, este Tribunal de Distrito Judicial y la Corte Suprema de Justicia. Además, por su estadía del proceso en la CSJ surtiéndose la casación se generó sus propias costas impuestas por esta Corte.

-La cuantía de las pretensiones reconocidas en la sentencia: En la sentencia, si bien por un lado se negaron las pretensiones respecto del codemandante JOSÉ MIGUEL CABARCAS PUELLO, en lo que refiere a la señora NELLY DEL CARMEN CABARCAS PUELLO, se ordenó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a partir del 7 de abril de 2012, siendo claro que se trata de una prestación periódica.

Ahora bien, la *a quo* tasó las agencias en derecho de primera instancia en la suma de \$9.100.000, sin especificar si tal monto lo determinó con base en salarios mínimos o si de haberlo hecho así, los salarios mínimos que tuvo en cuenta fueron los vigentes para la época de la sentencia o de la liquidación, lo cual resulta relevante en la medida que tal suma debía calcularse atendiendo no solo los topes establecidos en el Acuerdo 1887 de 2003 y que, por tratarse de una prestación periódica, no deben superar los 20 SMLMV, sino que, además, deben guardar proporción con los aspectos ya reseñados.

Así pues, conforme los criterios señalados y teniendo en cuenta que las pretensiones de la demandante NELLY DEL CARMEN ACUÑA TORRES prosperaron solo parcialmente, pues resultó vencida en parte respecto del retroactivo pensional pretendido entre el 16 de enero de 2006 y el 6 de abril de 2012, por haber prosperado respecto de este la excepción de prescripción, y en lo concerniente a los intereses moratorios del Art. 141 de la Ley 100 de 1993 de los que se absolvió, considera la Sala, que pudiéndose imponer un máximo de 20SMLMV, las costas en este caso deben corresponder a 10 salarios mínimos

legales mensuales vigentes para el año 2017 en que se profirió la sentencia de primera instancia, momento para el cual, el salario mínimo era de \$737.717.

De esta manera, las agencias en derecho de primera instancia a cargo de PROTECCIÓN S.A. en favor de la codemandante NELLY DEL CARMEN ACUÑA TORRES ascienden a **\$7.377.170**, siendo este valor el que se ajusta a todos los aspectos de la presente acción ordinaria laboral, como lo son la naturaleza del proceso, duración, y actividad del apoderado de la demandante, a lo que se suma las costas de segunda instancia que se fijaron en el monto de \$ 900.000 para un total de **\$8.277.170**.

No habiendo más aspectos por resolver del recurso de apelación, se MODIFICARÁ el auto apelado mediante el cual se aprobó la liquidación de costas.

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL,

**RESUELVE:**

**MODIFICAR** el auto interlocutorio apelado que aprobó la liquidación de costas, proferido el 23 de agosto de 2023, por el JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, en el sentido que las agencias en derecho de primera instancia a cargo de PROTECCIÓN S.A. en favor de la codemandante NELLY DEL CARMEN ACUÑA TORRES, se fijan en la suma **\$7.377.170**, a lo que se suma las costas de segunda instancia que se fijaron en el monto de \$ 900.000 para un total de **\$8.277.170**, conforme lo explicado en la parte motiva.

Devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

Lo resuelto se notifica por ESTADOS.

Se firma en constancia por los que intervinieron en la decisión, los Magistrados,

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL  
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -  
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados  
N ° **194** del **14 DE NOVIEMBRE DE 2023**.

**consultable aquí:**

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>

**Firmado Por:**

**Francisco Arango Torres**  
**Magistrado**  
**Sala Laboral**  
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

**Jaime Alberto Aristizabal Gomez**  
**Magistrado**  
**Sala Laboral**  
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

**John Jairo Acosta Perez**  
**Magistrado**  
**Sala Laboral**  
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ca760eb96960b38c09cbc378e20ca130942cf6e0a8392e59f582b0187f874a00**

Documento generado en 10/11/2023 03:08:30 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**